

¿Le llegó la hora a la impunidad en el Perú?

por Juan Miranda Sánchez, periodista peruano,
Bachiller en Antropología por la Universidad San Agustín de Arequipa,
y redactor del diario CORREO de Tacna-Perú.

Colina era el apellido de un joven oficial del ejército peruano que logró penetrar en las huestes de Sendero Luminoso durante la época de la violencia que desangró al Perú iniciados los años 80. Su trabajo de inteligencia fue impecable, al punto que, al parecer, cayó abatido por las balas de su propio ejército, confundido, hasta el final; como un peligroso elemento de la subversión.

Los militares en las zonas de emergencia, donde actuaba Sendero Luminoso, lo veneraban en secreto. Pero antes que ese orgullo se hiciera conocido, el nombre “Colina” se fue convirtiendo en un murmullo de horror y espanto.

Poco a poco “Colina” fue el sinónimo de la muerte. Recién eran los inicios del gobierno de Alberto Fujimori y ya “Colina” evocaba desapariciones, secuestros y tumbas clandestinas.

El periodismo de oposición de entonces, el poco que existía; daba cuenta de este comando de aniquilamiento que operaba clandestinamente y había detectado también a algunos de sus integrantes, pero sólo uno de esos nombres se hizo célebre porque se lo designaba como el sanguinario jefe operativo, el mayor Santiago Martín Rivas. Ante los informes periodísticos, el accionar de los organismos de Derechos Humanos y la infatigable lucha de los familiares de las víctimas, los integrantes del “Grupo Colina” fueron denunciados.

Sin embargo, lo que debió juzgarse como delito común, cambió de jurisdicción; el Congreso dominado por el fujimorismo dio una ley para que ese caso pase a conocimiento de un tribunal militar, como si se tratara de delitos en función militar. El “Grupo Colina” fue encontrado culpable pero los jueces militares le dieron una condena por demás benevolente, entre otras cosas; fueron reclusos en las mismas instalaciones militares. Nadie supo jamás si realmente las condenas fueron efectivas. Poco tiempo después el propio Alberto Fujimori presentó al Congreso una ley de Amnistía, la mayoría fujimorista la aprobó casi de madrugada y Martín Rivas y sus hombres quedaron en libertad, y el delito debía de olvidarse.

Para esos años el mayor Martín Rivas era intensamente buscado por la prensa, hasta que un domingo por la noche de 1995 apareció en las pantallas de los televisores del país en uno de los programas dominicales que marcaban la pauta de lo que hablaban y escribían los periodistas peruanos durante la semana.

La voz bronca y trasnochada de uno de los periodistas complacientes de entonces presentó a la nación una imagen inolvidable: los ojos enloquecidos, los músculos contraídos con angustia que habían mostrado algunos bocetos de la prensa escrita no

tenían nada que ver con lo que ahora se veía en la pantalla (la conciencia nacional de los peruanos); ese rostro del cual se conocían sólo algunas fotos se movía, y lo que muchos creíamos era lo más cercano a las garras del demonio, tenía voz.

Pero un detalle grosero revelaba la farsa de aquella primicia periodística, el rostro enmarcado por unos anteojos a medida acentuaban demasiado la coartada que querían presentar del asesino; y el mayor Martin Rivas lo repitió más de una vez, “yo soy un analista de inteligencia”, se separaba así de la idea que teníamos todos del feroz ejecutor de aquel comando de aniquilamiento.

Demás está decir que aquella noche, la entrevista que presentó Panamericana Televisión, cuyo presidente del Directorio se encuentra actualmente procesado por también haber recibido dinero del asesor presidencial Vladimiro Montesinos; será inolvidable no sólo por el rostro casi intelectual que presentaron de Martin Rivas, con anteojos y bigotitos; sino por las preguntas que no se hicieron. A partir de allí se quiso humanizar al monstruo, pero lo único que lograron fue convertirlo en el símbolo de la impunidad que cubrió todos los delitos del fujimorismo.

A fines del 2000 el monje negro del régimen, Vladimiro Montesinos, caía en desgracia, un video permitía verlo en el preciso momento en que sobornaba congresistas con el dinero de todos los peruanos, se le vio después con empresarios, dueños de canales de televisión y un largo etcétera. Caído Montesinos, Alberto Fujimori abandonó palacio, llenó maletas con más vídeos y se refugió en Japón. Martin Rivas tuvo que vivir desde entonces a salto de mata, escondiéndose en diferentes domicilios hasta el pasado 17 de noviembre en que fue detenido en su madriguera, donde rondaba desesperado encontrando tregua únicamente en lo que se le había hecho un vicio, o lo que le daba la única certeza de sentirse vivo, clasificar toda la información que le llegaba a las manos. La tarde en que lo detuvieron Martin Rivas no salía de su perplejidad, su cerebro acostumbrado a procesar información y ejecutar operativos no asimilaba aún la posibilidad que no hubiera ahora nadie que impidiera que lo toquen, ya que incluso cuando Fujimori y Montesinos se encuentran fuera de escena; él seguía recibiendo apoyo y ayuda.

A inicios de noviembre la prensa informó que Martin Rivas cobraba puntualmente su pensión como militar retirado, al menos entre diciembre del 2001 y mayo del 2002. El propio Martin Rivas envió a los medios de comunicación una carta donde defendía su derecho a percibir S/. 1,556 soles mensuales. La cifra representa mas de 3 veces lo que ganan la mayoría de los peruanos, sin haber cometido crimen alguno.

Su rostro encierra un silencio absoluto y es poco lo que ha dicho hasta el momento, basando su defensa en dos aspectos: sólo reconocer que realizó trabajos de análisis sobre la acción senderista y negar la existencia del grupo de aniquilamiento “Colina”, pero el 11 de abril pasado en el ex Servicio de Inteligencia Nacional, el tenebroso SIN que utilizó a su antojo Vladimiro Montesinos, se encontraron documentos reservados con la rúbrica del mayor Martin Rivas como jefe del “Destacamento Colina”.

Un sector de la ciudadanía en el Perú abriga las esperanzas que Martin Rivas pueda decir hasta qué niveles del gobierno tenían conocimiento del accionar de este aparato paralelo a la institución militar. Las miradas se dirigen al Japón y a la posibilidad que Alberto Fujimori sea procesado por delitos de Lesa Humanidad obligando al gobierno de ese país a que deje de protegerlo.

Todos los indicios sobre el accionar del “Grupo Colina” permiten entender que se trataba de un aparato que contaba con la anuencia y el conocimiento de algunos mandos de la institución, los más encumbrados. ¿Desde cuándo esta forma de operar obedece a una política institucionalizada?, esta es una pregunta que nos asoma a una realidad espantosa, que desgraciada y probablemente no sea sólo patrimonio de los peruanos. Otro aspecto por investigar es hasta dónde se involucraron diferentes esferas de la sociedad en la protección a este aparato de muerte; congresistas, empresarios de medios de comunicación, periodistas, entre otros. Todo un engranaje que ha servido para mantener la impunidad de un proyecto de país que empezaba a tomar forma.

Pero esa sombra de la impunidad fue mucho más allá y parece haber calado incluso en el espíritu de los ciudadanos. No son muchos los que actualmente reconocen la necesidad e importancia de que se conozca la verdad de aquellos años. El impacto del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no ha sido el que se esperaba de parte de la comunidad. Incluso, un congresista que sigue el tema de Derechos Humanos me confesó en una entrevista que la mayor preocupación de algunas personas que dan su testimonio, en las audiencias públicas ante la Comisión, es saber al final cuánto les tocará recibir como reparación civil por su familiar desaparecido o torturado.

Los niveles de desempleo y falta de oportunidades entre los peruanos tienen mayor importancia que la sanción para quienes saquearon el país y asesinaron impunemente. Llamó poderosamente la atención cómo en las últimas elecciones de noviembre para gobiernos locales y regionales, en algunos departamentos del país; la población decidió apoyar a personajes vinculados con el sórdido régimen fujimorista.

Hasta el momento de la redacción de este artículo Santiago Martin Rivas continuaba jugando al analista ante la jueza y la fiscal que tomaban su declaración, como queriendo negarse a que se le acuse, entre otras, de la muerte del periodista Pedro Yauri en Huacho, la familia Ventocilla en Huaral, los jóvenes y campesinos en el Valle del Santa, ambulantes de Barrios Altos de Lima, la muerte del dirigente sindical Pedro Huillca Tecse, la desaparición y descuartizamiento de la ex agente de Inteligencia Mariela Barreto Riofano y la muerte de 11 estudiantes universitarios y un profesor de la Universidad Guzmán y Valle, La Cantuta.

El caso “La Cantuta”

El delito existía. En Lima, 11 estudiantes de la Universidad Guzmán y Valle, La Cantuta; y un profesor, habían desaparecido; pero los cuerpos no eran encontrados. Sin cuerpo del delito no hay delito decía la ortodoxia penal, pero una congresista oficialista, Martha Chávez, una mañana amaneció con una inspiración mayor y asegurando que todo no era

más que otra patraña de la oposición y cierto sector de la prensa, dijo ante el parlamento - y la incredulidad de toda la nación- que el profesor y los estudiantes, “se habían autosecuestrado”.

Los familiares de los desaparecidos, la actividad de los organismos defensores de los Derechos Humanos, para entonces severamente atacados por el fujimorismo; y la actividad de la prensa independiente impidieron que el tema se olvide. En medio de esta obsesión el periodista José Arrieta recibió una pista de alguien que le aseguró saber dónde estaban los cuerpos enterrados. Un mapa dibujado a mano, flechas e indicaciones en el papel ajado deben permanecer aún en poder de Arrieta porque con esa simple pista, su jefe, el director de la Revista Sí, Ricardo Uceda, debió haber dicho “puta madre!” como decimos todos los peruanos cuando el suelo se nos da vuelta, para lanzarse a la cacería de esa noticia.

Uceda y Arrieta llegaron hasta las afueras de la ciudad y adivinando las indicaciones de aquel mapa del miedo y la delación se lanzaron a excavar como canes enfebrecidos. Al final el mapa no recompensaba con el hallazgo de un premio, sino la más exhaltante muestra de nuestras miserias a través de la historia, los restos calcinados de osamentas humanas.

Había cuerpo, entonces había delito. Pero la imaginación fujimorista no tenía límites, muchos de los huesos hallados eran sólo un montón de ceniza, nada podía probarse con ello. Y cuando el oficialismo se apresuraba a cerrar el caso, en medio de la tierra alguien levantó una cadena que contenía varias llaves ennegrecidas. La madre de uno de los estudiantes desaparecidos reconoció la prenda y el grito que llevaba contenido durante tantos años ni siquiera llegó a salir convertido en consuelo porque, ya en la habitación de los desaparecidos, uno de los candados de la gabeta saltó al abrirse enmudeciéndolo todo. Luego se fueron abriendo otras gabetas y parece que ya hemos tardado mucho para que se abra definitivamente esa caja de horror que encierra la verdad en este y muchos otros casos.

January 2003.